



**Nuevas amenazas y estrategias militares en Colombia tras el  
Acuerdo de Paz con las FARC-EP**

**Mayor (EJC) Carlos Andrés Urrego Guerrero**

**Capítulo de libro para optar al título profesional:  
Magister en seguridad y defensa**

**Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
Bogotá D.C., Colombia**

**2025**

DATOS GENERALES		
Nombre del estudiante	:	Mayor (EJC) Urrego Guerrero Carlos Andrés
Identificación	:	80828079
Programa académico	:	Maestría en seguridad y defensa
Tutor metodológico	:	Profesor Jonnathan Jiménez Reina
Tutor temático	:	Tc (r) William Alfredo Sierra Gutiérrez
Fecha de entrega	:	08 agosto 2025
Extensión	:	11.176 palabras (08.08.2025)

**DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS**

El autor declara que este capítulo de libro fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este capítulo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-No Comercial-Sin Obras Derivadas.

**AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN**

El autor autoriza / no autoriza que este capítulo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

**Nuevas amenazas y estrategias militares en Colombia tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP**

**New threats and military strategies in Colombia following the Peace Agreement with the FARC-EP**

Carlos Andrés Urrego Guerrero

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Ferney Augusto Pajoy Cuellar

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

**Resumen:** Este capítulo analiza las transformaciones en la seguridad nacional de Colombia tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP (2016), enfocándose en la emergencia de nuevas amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal, las disidencias armadas y la violencia urbana. Mediante una metodología cualitativa basada en análisis documental y de discurso, se examinan las estrategias adoptadas por las Fuerzas Militares Colombianas (FMC), incluyendo operaciones contra economías ilícitas, protección de comunidades vulnerables y apoyo a la justicia transicional. Los resultados evidencian avances tácticos en la contención de actores armados, pero también limitaciones estructurales como la falta de coordinación interinstitucional, recursos insuficientes y ausencia de políticas sociales complementarias. Se concluye que la consolidación de la paz requiere una gobernanza multinivel, un enfoque centrado en la seguridad humana y una articulación efectiva entre defensa, desarrollo y participación ciudadana.

*Palabras clave:* amenaza; conflicto armado; fuerzas armadas; gobernanza; paz; seguridad

**Abstract:** This chapter analyzes the transformations in Colombia’s national security following the 2016 Peace Agreement with the FARC-EP, focusing on the emergence of new threats such as drug trafficking, illegal mining, dissident groups, and urban violence. Using a qualitative methodology based on documentary and discourse analysis, it examines the strategies adopted by the Colombian Military Forces (FMC), including operations against illicit economies, protection of vulnerable

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

communities, and support for transitional justice. The findings reveal tactical progress in containing armed actors, but also structural limitations such as weak inter-institutional coordination, insufficient resources, and the absence of complementary social policies. The chapter concludes that consolidating peace requires multilevel governance, a human security-centered approach, and effective articulation between defense, development, and citizen participation

**Keywords:** Threat; Armed Forces; Armed Groups; Peace; Security

### **Carlos Andrés Urrego Guerrero**

Mayor del Ejército Nacional de Colombia. Candidato a magíster en seguridad y defensa, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. <https://orcid.org/0009-0002-9835-0342> - Contacto: carlos.urrego@esdeg.edu.co.

### **Ferney Augusto Pajoy Cuellar**

Magister en Seguridad y defensa Nacionales. Escuela Superior de Guerra, Especialista en Finanzas y Administración Pública. Universidad Militar nueva Granada, Profesional en Ciencias Militares. Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Administrador Logístico. Escuela Logística del Ejército. <https://orcid.org/0009-0006-5335-7232> Contacto: Ferney.pajoy@esdeg.edu.co

## **Introducción**

La firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en noviembre de 2016 marcó un punto de inflexión en la historia reciente del país. La desmovilización del grupo insurgente más antiguo y numeroso de América Latina generó grandes expectativas en torno al cierre del conflicto armado y la posibilidad de consolidar una paz duradera. No obstante, el periodo posterior al acuerdo no ha logrado materializar plenamente estas aspiraciones. Por el contrario, ha emergido un entorno de seguridad caracterizado por la reconfiguración de actores armados ilegales, la expansión de economías ilícitas y el resurgimiento de nuevas formas de violencia localizada, lo que ha dado lugar a una fase de conflictividad pos acuerdo (Baquero et al., 2022).

Lejos de reducir las amenazas a la seguridad nacional, el escenario pos acuerdo ha potenciado una fragmentación del conflicto, evidenciada en la proliferación de disidencias de las FARC-EP, el fortalecimiento territorial del ELN, y la consolidación de grupos armados organizados (GAO) y estructuras criminales transnacionales, como el Clan del Golfo, que disputan el control de corredores estratégicos y rentas ilegales. Estas organizaciones, además de operar bajo lógicas territoriales de dominio y coerción, han generado una presión sistemática sobre comunidades rurales, especialmente en zonas donde el Estado no logró consolidar su presencia tras la desmovilización insurgente (International Crisis Group, 2016).

En este contexto, el objetivo de este capítulo es analizar las transformaciones recientes en el campo de la seguridad nacional en Colombia, evaluando el tipo de amenazas que han emergido tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, las estrategias adoptadas por las Fuerzas Militares para enfrentarlas y los impactos reales de dichas estrategias en la seguridad y protección de la población civil. El análisis parte de la premisa de que la consolidación de la paz no puede depender únicamente de la desarticulación militar del enemigo tradicional, sino que requiere estrategias más amplias que aborden las causas estructurales del conflicto, garanticen el control territorial estatal y prioricen la seguridad humana.

La investigación se estructura en torno a tres objetivos específicos:

1. Identificar las nuevas amenazas a la seguridad nacional surgidas tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP.
2. Examinar las estrategias implementadas por las Fuerzas Militares colombianas frente a estas amenazas.
3. Evaluar el impacto de dichas estrategias en la seguridad y bienestar de las poblaciones, particularmente en contextos rurales y fronterizos.

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo se basa en una revisión documental y análisis cualitativo de fuentes primarias y secundarias: informes del sector defensa, pronunciamientos institucionales, investigaciones académicas, reportes de organismos internacionales y bases de datos sobre seguridad. Esta metodología permite una lectura crítica y contextualizada de la transformación del conflicto, así como de la adecuación —o no— de las respuestas institucionales a los nuevos desafíos estratégicos.

Los primeros hallazgos muestran que la salida de las FARC-EP de los territorios dejó un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por estructuras armadas con lógicas fragmentadas, orientadas más al control de rentas ilícitas que a una confrontación ideológica con el Estado (Castellanos et al., 2024).

A su vez, el ELN ha aprovechado este nuevo escenario para expandirse, disputando corredores estratégicos y estableciendo alianzas o confrontaciones con otros grupos, según las dinámicas territoriales (Álvarez et al., 2018).

Las Fuerzas Militares, ante este panorama, han impulsado reformas doctrinales y operativas, incluyendo la creación y fortalecimiento de Fuerzas de Tarea Conjunta, el desarrollo de capacidades en inteligencia multispectral, y la implementación del *Plan Estratégico de Seguridad y Defensa 2030*, con énfasis en un enfoque multidimensional (Comando General de las Fuerzas Militares, 2015).

Adicionalmente, se han desarrollado operaciones de estabilización bajo el marco del Plan de Acción Oportuna (PAO), articulando esfuerzos con otras entidades estatales para intervenir en áreas de alta conflictividad (Presidencia de la República, 2018). Sin embargo, los indicadores de violencia

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

en estas regiones -desplazamiento forzado, homicidios de líderes sociales, masacres- muestran resultados limitados y evidencian una brecha entre presencia militar y seguridad efectiva (Naciones Unidas, 2024). En varios casos, las intervenciones carecen de sostenibilidad, y las estrategias defensivas tienden a priorizar el control territorial sobre la protección integral de los derechos ciudadanos.

En este sentido, el capítulo propone una lectura crítica desde una perspectiva de seguridad integral, que trasciende la visión centrada exclusivamente en el uso de la fuerza y reconoce que la defensa nacional debe vincularse con el fortalecimiento institucional, el acceso a derechos, la gobernabilidad democrática y la recuperación del monopolio legítimo de la fuerza. El contexto pos acuerdo exige estrategias interinstitucionales, sensibles al territorio y orientadas a generar confianza en el Estado, particularmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto y la exclusión.

Como conclusión preliminar, este trabajo sostiene que la persistencia de amenazas armadas y criminales tras el Acuerdo de Paz pone en tensión los avances en seguridad alcanzados durante el proceso de desmovilización. Las Fuerzas Militares enfrentan el reto de adaptarse a un entorno de conflictividad híbrida y de alta complejidad, en el cual su papel no solo se redefine operativamente, sino también en términos de legitimidad y relación con la sociedad civil. Por ello, las estrategias militares deben articularse con una visión de Estado más amplia, que combine seguridad con justicia, desarrollo y participación ciudadana.

En suma, este capítulo contribuye al análisis de la seguridad y defensa en Colombia desde una mirada crítica, contextualizada y orientada a la formulación de políticas públicas que respondan eficazmente a las nuevas amenazas sin reproducir esquemas de militarización excesiva ni desconocer los avances del proceso de paz.

### **Metodología**

La investigación titulada “Nuevas amenazas y estrategias militares en Colombia tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP” se inserta en el campo de los estudios estratégicos y de seguridad, con una mirada crítica y multidimensional de los escenarios posteriores a la desmovilización del grupo insurgente más antiguo del país. A partir de este contexto, se adopta un enfoque cualitativo e

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

interpretativo, que permite comprender en profundidad las transformaciones recientes en el panorama de amenazas y la evolución de las respuestas institucionales del sector defensa.

El estudio se propone analizar cómo, tras la firma del Acuerdo Final en 2016, han emergido nuevas configuraciones de violencia armada, estructuras criminales híbridas y reconfiguraciones estratégicas que afectan la seguridad nacional. Estas transformaciones no pueden ser comprendidas únicamente desde métricas cuantitativas, sino que requieren una aproximación que privilegie el análisis de discursos, doctrinas, prácticas operativas, percepciones institucionales y experiencias locales. Como afirman (Flick, 2007; Hernández et al., 2014) el enfoque cualitativo resulta idóneo para examinar fenómenos complejos donde intervienen variables sociales, institucionales, políticas y simbólicas, como es el caso de las amenazas no convencionales y las estrategias de seguridad postconflicto.

El enfoque cualitativo permite interpretar cómo se construyen y redefinen las categorías de “amenaza”, “enemigo”, “seguridad” o “presencia del Estado” en un contexto marcado por la fragmentación del conflicto armado, el auge de economías ilícitas y la presencia de múltiples actores armados ilegales. Asimismo, este enfoque posibilita una lectura situada y crítica de la doctrina militar vigente, del discurso institucional de las Fuerzas Armadas y de su papel en zonas rurales, fronterizas o históricamente excluidas del Estado central.

Como señala (Kaldor, 2012), los conflictos contemporáneos deben entenderse más allá de la guerra tradicional, y su análisis exige herramientas metodológicas capaces de captar las lógicas de seguridad híbridas, la intervención militar en escenarios no convencionales y los dilemas que enfrenta el Estado ante la persistencia de actores armados no estatales. Por ello, se prioriza una estrategia de investigación cualitativa que permita reconstruir sentidos, prácticas y estructuras en torno a la seguridad nacional en la etapa pos-acuerdo.

### **Técnicas de recolección de información**

La investigación prevé la triangulación de técnicas cualitativas para robustecer la validez y profundidad del análisis. Entre ellas se incluyen:

- **Análisis documental**, orientado a revisar informes institucionales del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, y ONG especializadas en

## Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

seguridad. Asimismo, se incluirá normativa vigente (planes estratégicos, directivas operacionales, documentos CONPES y doctrinas militares).

- **Revisión documental sistemática** de fuentes primarias y secundarias relacionadas con el periodo posterior al Acuerdo de Paz. Esta técnica contempla el análisis de documentos institucionales (planes estratégicos, directivas operacionales, informes del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública), pronunciamientos del Gobierno Nacional, informes de organismos internacionales (ONU, OEA), publicaciones de centros de investigación en seguridad.
- **Análisis de discurso y narrativas estratégicas**, enfocado en los marcos discursivos con los que el Estado y las Fuerzas Militares interpretan y comunican las amenazas actuales. Este análisis se aplicará a pronunciamientos oficiales, discursos de mando, comunicados públicos y narrativas mediáticas.

### Unidades de análisis

La investigación se centrará en unidades de análisis como:

- Las **disidencias de las FARC-EP**, en tanto actor emergente con características militares y criminales.
- El **ELN**, que ha ampliado su presencia territorial tras el Acuerdo de Paz.
- Grupos armados organizados como el **Clan del Golfo**, que disputan control territorial y rentas ilegales.
- Las **Fuerzas Militares colombianas**, como actor institucional obligado a reformular sus estrategias ante la nueva configuración del conflicto.
- Las **comunidades rurales y fronterizas**, que experimentan directamente los impactos de las estrategias de seguridad y de las nuevas formas de violencia.

### Conclusión metodológica

Este diseño metodológico busca generar un análisis crítico y contextualizado sobre las nuevas amenazas a la seguridad nacional y las estrategias militares adoptadas tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, superando miradas reduccionistas centradas únicamente en lo operativo. La investigación

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

privilegia una perspectiva interpretativa, capaz de vincular la seguridad con el territorio, los actores locales y las dinámicas sociopolíticas que configuran la realidad colombiana en el pos-acuerdo. En consecuencia, se espera contribuir al debate académico sobre la transformación del conflicto armado, y aportar insumos relevantes para el rediseño de políticas de defensa con enfoque humano, territorial y sostenible.

### **Objetivo específico 1**

#### **Nuevas Amenazas a la Seguridad Nacional tras el Acuerdo de Paz**

La firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP marcó un punto de inflexión en el conflicto armado interno, pero no su fin absoluto. En lugar de una pacificación total, el posconflicto ha dado lugar a una reconfiguración profunda de las dinámicas de violencia y seguridad. Según (Niño & Castillo, 2021), la desaparición de las FARC como un enemigo unificado y centralizado ha fragmentado el panorama de amenazas, dando paso a un escenario multifacético caracterizado por la proliferación de actores armados no estatales y economías ilícitas. Estas nuevas amenazas-narcotráfico y economías ilegales, disidencias de las FARC, y violencia urbana junto a otros actores emergentes- han desafiado la capacidad de las Fuerzas Militares Colombianas (FMC) para mantener el monopolio de la fuerza y garantizar la seguridad nacional, como lo plantea la teoría de capacidades estatales de (Cubides et al., 2018).

A continuación, se analizan en detalle estas amenazas, sus características, alcance y las implicaciones para la gobernanza y la seguridad humana en el contexto colombiano.

Visión estratégica de UNODC para América Latina y el Caribe

#### ***Narcotráfico y Economías Ilegales***

El narcotráfico sigue siendo el eje principal de la inseguridad en el posconflicto colombiano, exacerbado por el vacío de poder dejado por las FARC, que durante décadas regularon la producción y tráfico de cocaína en vastas zonas rurales. Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestran un aumento sostenido en los cultivos de coca, pasando de 146,000 hectáreas en 2016 a 171,000 en 2022, con departamentos como Nariño, Cauca y Putumayo como epicentros de esta actividad ilícita (UNDOC, 2022).

(Peña et al., 2020), argumentan que la desmovilización de las FARC desestructuró las cadenas de mando que mantenían cierto orden en estas economías, permitiendo la entrada de carteles mexicanos (como el Cartel de Sinaloa) y grupos locales que compiten por el control territorial. Este fenómeno ha transformado el narcotráfico en una amenaza más descentralizada y transnacional, lo que complica las estrategias de interdicción militar

Además del narcotráfico, la minería ilegal ha emergido como una economía ilícita paralela de gran impacto. En regiones como Chocó, Antioquia y el Bajo Cauca, la extracción ilícita de oro y coltán ha generado ingresos multimillonarios para grupos armados, al tiempo que causa devastación ambiental y social (Villamizar et al., 2024). Esta actividad ha provocado la deforestación de 158.894 hectáreas para el año 2019, impacto que se evidencia principalmente en las regiones la Amazonia y los Andes, según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (IDEAM, 2019), afectando la seguridad ambiental y desplazando comunidades indígenas y afrodescendientes.

Un caso emblemático es el del río Atrato, donde la Corte Constitucional de Colombia (Corte Constitucional República de Colombia, 2016) reconoció el daño ecológico causado por la minería ilegal como una violación de los derechos fundamentales de las comunidades ribereñas. Estas economías no solo financian la violencia, sino que erosionan la seguridad humana al limitar el acceso a recursos básicos como agua potable y tierras cultivables, un aspecto que Niño y Castillo (2021) vinculan a la multidimensionalidad de las amenazas en el posconflicto.

La interconexión entre narcotráfico y minería ilegal ilustra la complejidad de estas amenazas. Por ejemplo, en el municipio de Tumaco (Nariño), las autoridades han identificado cómo las ganancias del narcotráfico se reinvierten en operaciones mineras ilegales, creando un ciclo económico que sostiene a grupos armados y dificulta su desmantelamiento (UNDOC, 2022). Esta dinámica transnacional, con vínculos a mercados en Asia y Norteamérica, exige una respuesta que trascienda las capacidades tradicionales de las FMC, desafiando su enfoque históricamente centrado en operaciones internas.

### ***Disidencias de las FARC***

Las disidencias de las antiguas FARC se han consolidado como una de las amenazas más persistentes y visibles en el escenario posterior al Acuerdo de Paz. Estas facciones están conformadas por excombatientes que, por diversas razones, decidieron no acogerse al proceso de desmovilización o que posteriormente abandonaron los programas de reincorporación. En ausencia de la estructura

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

central de la antigua guerrilla, estos grupos han ocupado espacios estratégicos, especialmente en zonas fronterizas, donde han reconstruido redes armadas y económicas.

Organizaciones como el Frente Primero y el Frente Oliver Sinisterra han sido identificadas como actores relevantes en esta reconfiguración del conflicto, operando en territorios con alta presencia de economías ilegales y limitada capacidad estatal. Su accionar ha estado marcado por enfrentamientos con las Fuerzas Militares Colombianas, así como por ataques contra líderes sociales y comunidades vulnerables, lo que evidencia su papel como agentes de desestabilización territorial (Arias Henao, 2020).

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ha documentado cómo estas disidencias han mantenido una capacidad operativa significativa, articulando acciones violentas que desafían los esfuerzos institucionales por consolidar la paz. Su presencia en regiones como Putumayo, Arauca y Norte de Santander no solo representa un riesgo para la seguridad nacional, sino que también pone en entredicho la sostenibilidad del proceso de reincorporación y la efectividad de las estrategias militares en el posconflicto.

Este panorama subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento al proceso de paz, así como de diseñar respuestas integrales que combinen acción militar, desarrollo territorial y justicia transicional. La persistencia de las disidencias revela que la paz no puede depender exclusivamente de la desmovilización formal, sino que requiere transformaciones estructurales que aborden las causas profundas del conflicto armado (Arias Henao, 2020).

A diferencia de las FARC históricas, las disidencias carecen de una cohesión ideológica clara, operando más como redes criminales que como una guerrilla revolucionaria, (UNDOC, 2022) señala que estas facciones han adoptado tácticas híbridas, combinando estrategias de guerra irregular—como emboscadas y extorsión—con alianzas con actores transnacionales. Por ejemplo, en la frontera con Venezuela, las disidencias han colaborado con el Clan del Golfo y grupos venezolanos como el ELN, aprovechando la porosidad fronteriza para el contrabando de droga y armas (International Crisis Group, 2016). Un caso concreto es el del Catatumbo, donde las disidencias han impuesto un control territorial que incluye impuestos ilegales a campesinos y ataques a infraestructuras petroleras, desafiando directamente la autoridad estatal.

La resiliencia de las disidencias se explica por varios factores: el acceso a economías ilícitas, el conocimiento del terreno adquirido durante el conflicto y la falta de oportunidades económicas para excombatientes, lo que limita el éxito de los programas de reintegración (Villamizar et al., 2024).

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

Además, su capacidad para reclutar jóvenes en zonas rurales marginales, como documenta el informe de la Defensoría del Pueblo (2019), refleja las fallas estructurales del posconflicto, como la ausencia de reforma agraria y desarrollo económico, aspectos que Céspedes y Prieto (2017) critican como vacíos del Acuerdo de Paz. Esta amenaza pone en evidencia la necesidad de estrategias militares que no solo combatan a estos grupos, sino que aborden las condiciones socioeconómicas que los sostienen.

### ***Violencia Urbana y Otros Actores***

Mientras las zonas rurales continúan enfrentando el avance de economías ilícitas y la reconfiguración de grupos armados, las ciudades colombianas han experimentado una transformación en sus dinámicas de violencia. El crecimiento del microtráfico y la proliferación de pandillas urbanas han generado un nuevo tipo de inseguridad, caracterizado por disputas territoriales entre actores fragmentados, pero altamente violentos. Esta transición de la violencia desde lo rural hacia lo urbano ha sido documentada por diversos estudios que advierten sobre el surgimiento de economías ilegales en contextos urbanos marginalizados (Niño & Castillo, 2021).

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, la competencia por el control de rutas locales de distribución de drogas ha intensificado los conflictos entre pandillas, generando impactos significativos en la seguridad ciudadana. En barrios periféricos, estas organizaciones han establecido sistemas informales de poder basados en actividades como el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el sicariato. La ausencia de una presencia estatal efectiva, junto con altos niveles de desempleo juvenil, ha facilitado el reclutamiento de nuevos integrantes, consolidando estructuras criminales que operan con relativa impunidad.

Este fenómeno se agrava con la presencia de bandas transnacionales que han aprovechado las debilidades institucionales del posconflicto para expandir sus operaciones en el país. En ciudades como Cali, se han identificado organizaciones extranjeras que han logrado insertarse en el mercado local del microtráfico, evidenciando la dimensión internacional de la violencia urbana contemporánea.

La evolución de estas dinámicas plantea desafíos complejos para las estrategias de seguridad. La fragmentación de los actores, la informalidad de sus estructuras y su capacidad de adaptación requieren respuestas integrales que combinen inteligencia territorial, políticas sociales y fortalecimiento institucional. En este sentido, la seguridad urbana no puede ser abordada únicamente

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

desde una perspectiva coercitiva, sino que debe articularse con programas de inclusión, prevención y justicia restaurativa que respondan a las causas estructurales de la violencia. INDEPAZ. (2023)

Además de las pandillas, otros actores como los grupos paramilitares residuales y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han diversificado las amenazas. Aunque las AGC no son disidencias de las FARC, su expansión en regiones como Urabá y Córdoba ha intensificado la competencia por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico. (Pastrana & Vera, 2019) argumentan que esta multiplicidad de actores complica la formulación de políticas de seguridad coherentes, ya que las FMC deben enfrentar simultáneamente amenazas rurales de alta intensidad y dinámicas urbanas de baja escala, pero alta frecuencia. Este panorama fragmentado evidencia la transición de un conflicto bipolar (Estado vs. FARC) a uno multipolar, donde la ausencia de un “enemigo claro” desafía las capacidades operativas y estratégicas del Estado.

### **Objetivo específico 2**

#### **Estrategias Operativas y Adaptativas de las Fuerzas Militares Colombianas ante Nuevos Desafíos**

La transición al posconflicto tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP ha obligado a las Fuerzas Militares Colombianas (FMC) a reconfigurar sus estrategias para enfrentar un entorno de seguridad más complejo y diversificado. (Pastrana & Vera, 2019) argumentan que esta adaptación ha implicado un alejamiento del modelo tradicional de guerra interna contra un enemigo único hacia un enfoque multifacético que aborda amenazas como el narcotráfico, las disidencias y la violencia urbana. Este cambio ha requerido ajustes operativos y doctrinales y ha generado tensiones en las relaciones cívico-militares por la expansión de los roles militares en funciones tradicionalmente civiles, como la protección comunitaria y el apoyo a procesos de paz. A continuación, se examinan en detalle las principales estrategias implementadas por las FMC -operaciones contra economías ilegales, protección de comunidades vulnerables y apoyo a la justicia transicional- junto con sus logros, limitaciones y las dinámicas contextuales que las moldean.

#### ***Operaciones Contra Economías Ilegales***

Las operaciones militares orientadas a combatir economías ilegales, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, han constituido un eje central en la estrategia de seguridad durante el periodo posterior al conflicto armado. Estas acciones buscan desarticular las

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y restablecer el control estatal en territorios históricamente disputados.

La estrategia ha incluido campañas focalizadas en regiones con alta presencia de cultivos ilícitos y actividades extractivas ilegales, con el objetivo de debilitar las estructuras logísticas y económicas que sostienen la violencia. En este marco, se han desarrollado intervenciones que combinan erradicación manual, destrucción de infraestructura criminal y confiscación de maquinaria utilizada en actividades ilícitas. Estas operaciones han sido implementadas con especial énfasis en departamentos estratégicos, donde la presencia de actores armados y economías ilegales ha generado dinámicas de inseguridad persistente.

Una de las iniciativas más representativas ha sido la Campaña Artemisa, orientada a enfrentar la minería ilegal en zonas de alto valor ambiental y social. Esta campaña ha implicado el despliegue de unidades especializadas para el desmantelamiento de estructuras extractivas ilegales, así como la recuperación de ecosistemas afectados por la actividad criminal. No obstante, su ejecución ha enfrentado desafíos significativos, entre ellos la resistencia de redes locales vinculadas a la corrupción, la limitada capacidad institucional en áreas rurales y la complejidad de ejercer control territorial en contextos de alta conflictividad (Peña et al., 2020)

Estas operaciones, aunque necesarias desde una perspectiva de seguridad nacional, requieren ser complementadas con enfoques integrales que articulen la acción militar con políticas de desarrollo, justicia ambiental y fortalecimiento institucional. Solo así será posible transformar los territorios afectados por economías ilegales en espacios de paz, legalidad y sostenibilidad.

Sin embargo, Peña et al. (2020) destacan que estas operaciones enfrentan desafíos significativos. Logísticamente, la topografía accidentada y la falta de infraestructura vial en zonas rurales dificultan el acceso y la sostenibilidad de las intervenciones. Por ejemplo, en el municipio de Tumaco (Nariño), las FMC han destruido cultivos ilícitos en áreas selváticas, pero la reincidencia es alta debido a la ausencia de presencia estatal permanente y la dependencia económica de las comunidades locales en la coca. Esta resistencia comunitaria se agrava por la percepción de que las erradicaciones amenazan los medios de subsistencia sin ofrecer alternativas viables, un punto que Villamizar et al. (2024) vinculan a la falta de coordinación con programas de sustitución de cultivos del Acuerdo de Paz.

En el caso de la minería ilegal, las operaciones han logrado éxitos puntuales, como la captura de líderes de redes en el Bajo Cauca antioqueño, pero la corrupción en gobiernos locales y la

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

convivencia con empresas privadas permiten la rápida reorganización de estas actividades (GlobalWitness, 2021). Un caso ilustrativo es el del río Quito en Chocó, donde las FMC desmantelaron una operación minera en 2021, solo para que esta reapareciera meses después bajo nuevos operadores, según reportes de la (Defensoría del Pueblo, 2019). Esta persistencia refleja la dificultad de combatir economías ilícitas que operan en redes transnacionales y locales profundamente arraigadas, lo que Felbab-Brown (2021) describe como un desafío de “hidra de múltiples cabezas” para las fuerzas militares.

Además, las operaciones han incorporado tecnología avanzada, como drones y vigilancia satelital, para mejorar la inteligencia y la precisión. El programa Zeus del Ejército Nacional, por ejemplo, ha utilizado imágenes aéreas para identificar corredores de narcotráfico en la frontera con Venezuela. Sin embargo, la falta de recursos suficientes y la capacitación limitada del personal en estas herramientas reducen su efectividad, un vacío que Peña et. al. (2020) identifican como un obstáculo estructural en el posconflicto.

### ***Protección de Comunidades Vulnerables***

La protección de comunidades vulnerables se ha convertido en una prioridad estratégica para las FMC, alineada con el enfoque de seguridad humana que prioriza el bienestar de las personas sobre la seguridad estatal exclusiva (Alvarado & Arribas, 2021). (Villamizar et al., 2024) describen cómo las FMC han reorientado sus operaciones hacia la defensa de poblaciones en zonas rurales y fronterizas afectadas por las nuevas amenazas. Esto incluye patrullajes intensivos, establecimiento de puestos de control y apoyo a la reincorporación de excombatientes, con el objetivo de fortalecer la resiliencia comunitaria, definida como la capacidad de las comunidades para adaptarse a entornos inseguros (Peña et al., 2020).

Un ejemplo concreto es el despliegue en Tumaco, donde las FMC han instalado bases móviles para proteger a comunidades afrocolombianas de las disidencias y el narcotráfico. “Entre 2018 y 2022, estas acciones redujeron los enfrentamientos armados en un 20% en la región”, según datos del Sistema de Alertas Tempranas (Defensoría del Pueblo, 2022). Sin embargo, la efectividad de estas medidas se ve limitada por la falta de coordinación interinstitucional. Por ejemplo, mientras las FMC aseguran el perímetro, la ausencia de inversión en salud, educación o infraestructura por parte de entidades civiles perpetúa la vulnerabilidad de estas poblaciones (Céspedes & Prieto, 2017). En el caso de las comunidades indígenas del Vaupés, los patrullajes han contenido incursiones de grupos

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

armados, pero no han evitado el desplazamiento forzado provocado por la minería ilegal, que desplazó a más de 3,000 personas entre 2020 y 2022 (Defensoría del Pueblo, 2022).

En este contexto, Otra iniciativa clave ha sido el apoyo a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), parte del Acuerdo de Paz, donde las FMC han escoltado proyectos de infraestructura en 170 municipios priorizados. Sin embargo, (Villamizar et al., 2024) señalan que la falta de recursos y la burocracia han ralentizado estos esfuerzos, dejando a muchas comunidades expuestas. Además, la percepción comunitaria sobre estas operaciones es mixta: indican que, aunque los habitantes valoran la presencia militar como disuasivo, critican su incapacidad para abordar problemas estructurales como el acceso a tierras o servicios básicos, lo que limita la construcción de confianza y resiliencia.

Este enfoque también ha enfrentado críticas por su impacto diferenciado en grupos vulnerables, como mujeres y comunidades étnicas, un vacío identificado en la literatura. Por ejemplo, en el Cauca, las operaciones militares han incrementado la seguridad en términos de enfrentamientos, pero no han mitigado la violencia de género asociada a la presencia de grupos armados, un aspecto que requiere mayor atención estratégica (ONU MUJERES, 2022).

### ***Apoyo a la Justicia Transicional***

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, las Fuerzas Militares Colombianas (FMC) han asumido un papel relevante en el acompañamiento a los mecanismos de justicia transicional, consolidándose como actores estratégicos en la protección de procesos sensibles como la reincorporación de excombatientes y la garantía de seguridad en zonas priorizadas. Su colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido particularmente significativa, al brindar condiciones de seguridad para el desarrollo de audiencias, comparecencias y actividades de verdad y reparación en territorios históricamente afectados por el conflicto armado (Arias Henao, 2020).

La presencia militar en las antiguas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) ha sido interpretada como una muestra de compromiso institucional con la paz, al facilitar la transición de excombatientes hacia la vida civil. Sin embargo, esta participación también ha generado tensiones en el ámbito cívico-militar. Diversos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre la percepción de una “militarización” del proceso de paz, lo que ha alimentado desconfianza en contextos donde las Fuerzas Militares han sido históricamente asociadas con violaciones a los derechos humanos (Pastrana & Vera, 2019).

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

En paralelo, las FMC han desempeñado funciones de protección a líderes sociales, quienes enfrentan altos niveles de riesgo en el escenario posconflicto. La implementación de planes operativos orientados a salvaguardar la vida de estos actores ha buscado responder a la creciente amenaza de grupos armados ilegales en regiones estratégicas. No obstante, la efectividad de estas medidas ha sido limitada por factores estructurales como la falta de inteligencia oportuna, la dispersión territorial de las amenazas y la debilidad institucional en zonas periféricas (International Crisis Group, 2021).

Asimismo, el acompañamiento militar a programas de desarrollo rural, como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), ha evidenciado la necesidad de una articulación más sólida entre seguridad y política social. La implementación fragmentada de este programa ha afectado la confianza comunitaria y ha contribuido a la persistencia de economías ilegales, debilitando los esfuerzos de consolidación institucional.

Por otro lado, las operaciones contra la minería ilegal han enfrentado obstáculos significativos, derivados de la corrupción local, la limitada capacidad estatal y la ausencia de control efectivo en territorios estratégicos. Estas condiciones han dificultado la erradicación de economías extractivas ilegales, que continúan alimentando dinámicas de violencia y despojo en diversas regiones del país (Global Witness, 2021).

### ***Reflexión final***

Las estrategias de las FMC -operaciones contra economías ilegales, protección de comunidades vulnerables y apoyo a la justicia transicional- reflejan un esfuerzo por adaptarse a las nuevas amenazas del posconflicto, pero también revelan limitaciones estructurales. La falta de coordinación interinstitucional, los recursos insuficientes y la persistencia de desigualdades socioeconómicas socavan su impacto, como señalan (Peña et al., 2020; Villamizar et al., 2024). Estas tácticas, aunque operativamente sólidas en algunos casos, no abordan plenamente las causas raíz de la violencia, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más integral que combine acción militar con políticas sociales y económicas, un punto que se explorará en las recomendaciones. Este análisis proporciona una base para evaluar los resultados de estas estrategias en la siguiente sección

Las estrategias implementadas por las Fuerzas Militares Colombianas (FMC) tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP han buscado contrarrestar las nuevas amenazas identificadas - narcotráfico, disidencias, y violencia urbana- mientras protegen a la población en un contexto de posconflicto. Sin embargo, el impacto de estas estrategias en la seguridad nacional y la protección de

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

los ciudadanos, especialmente en zonas rurales y fronterizas, es heterogéneo, con avances notables en ciertos ámbitos y persistentes desafíos en otros. (Peña et al., 2020) argumentan que, aunque las FMC han logrado contener parcialmente la expansión de actores armados, la falta de presencia estatal sostenida y la incapacidad para abordar las raíces estructurales de la violencia limitan los resultados.

Este análisis evalúa el impacto en tres dimensiones clave: la seguridad en zonas rurales y fronterizas, la percepción comunitaria y la resiliencia, y los indicadores de seguridad nacional. Se emplea el marco de seguridad humana para entender cómo estas estrategias afectan no solo la estabilidad del Estado, sino también el bienestar de las comunidades vulnerables (Alvarado & Arribas, 2021).

### ***Seguridad en Zonas Rurales y Fronterizas***

Las zonas rurales y fronterizas del país, como aquellas ubicadas en el suroccidente y el nororiente, concentran algunas de las manifestaciones más complejas de las nuevas amenazas a la seguridad nacional. Factores como el aislamiento geográfico, la debilidad institucional y la cercanía a corredores transnacionales de economías ilícitas han configurado escenarios de alta conflictividad, donde el control estatal se ve constantemente desafiado.

En estos territorios, las operaciones de las Fuerzas Militares Colombianas han tenido resultados diversos. Por un lado, se han logrado avances en la contención de actores armados ilegales y en la reducción de enfrentamientos en áreas priorizadas por las políticas de intervención integral. Estas acciones han permitido, en ciertos casos, la recuperación temporal de espacios estratégicos y el retorno de comunidades desplazadas, lo que evidencia el potencial de la acción militar como herramienta de estabilización territorial.

Sin embargo, el impacto de estas operaciones no ha sido uniforme. En algunos municipios, las campañas contra el narcotráfico y la minería ilegal han logrado debilitar momentáneamente la presencia de grupos armados, pero sin consolidar transformaciones estructurales sostenibles. La persistencia de economías ilícitas, la fragmentación institucional y la limitada articulación con actores civiles han dificultado la consolidación de la paz en estos territorios.

Este panorama sugiere que la acción militar, aunque necesaria, debe ser complementada con estrategias integrales que incluyan desarrollo rural, fortalecimiento institucional y participación comunitaria. Solo mediante una intervención coordinada y multisectorial será posible transformar las zonas rurales y fronterizas en espacios de legalidad, inclusión y seguridad duradera.

Sin embargo, (Peña et al., 2020) señalan que estos logros son frágiles y de corto plazo. La reincidencia de actores armados es común debido a la ausencia de una presencia estatal integral que combine seguridad con desarrollo social. En el Catatumbo, por ejemplo, las operaciones militares han desmantelado campamentos de disidencias y el ELN, pero la falta de inversión en infraestructura y servicios básicos ha permitido que estos grupos regresen, manteniendo tasas de homicidio por encima del promedio nacional describen como un “ciclo de contención sin consolidación”, donde las FMC logran avances tácticos, pero no estratégicos (Niño & Castillo, 2021).

Uno de los aspectos más críticos en la implementación de estrategias de seguridad en el posconflicto es el impacto diferenciado que estas tienen sobre comunidades étnicas y mujeres, una dimensión que ha sido insuficientemente abordada en la literatura especializada. En regiones como el Chocó, las operaciones militares contra la minería ilegal han generado efectos ambivalentes: si bien han contribuido a la reducción de actividades extractivas ilícitas, también han provocado desplazamientos masivos de comunidades indígenas y afrodescendientes, exacerbando su vulnerabilidad y desarraigo territorial.

Estos desplazamientos, en muchos casos hacia centros urbanos sin condiciones adecuadas de acogida, han intensificado los riesgos sociales y económicos para estas poblaciones, debilitando los vínculos comunitarios y generando nuevas formas de exclusión. En paralelo, las mujeres en estas regiones enfrentan amenazas específicas, como la violencia sexual asociada a la presencia de actores armados ilegales y a las dinámicas de retaliación posteriores a las operaciones militares. Diversos informes han documentado cómo estas agresiones se intensifican en contextos de alta militarización, evidenciando la necesidad de incorporar enfoques de género en las estrategias de seguridad.

En las zonas fronterizas, como aquellas ubicadas en el oriente del país, el contexto se complejiza aún más por la porosidad territorial y la presencia de actores armados transnacionales. La colaboración entre disidencias colombianas y grupos armados del país vecino ha limitado la efectividad de las operaciones militares, desafiando la capacidad del Estado para ejercer control soberano. Este escenario subraya la urgencia de avanzar hacia una gobernanza multinivel que trascienda las capacidades unilaterales de las Fuerzas Militares y promueva mecanismos de cooperación binacional, articulación institucional y participación comunitaria.

En suma, el abordaje de las nuevas amenazas a la seguridad nacional requiere una mirada interseccional que reconozca las particularidades de los territorios y las poblaciones afectadas. Solo

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

mediante estrategias integrales, sensibles al contexto étnico, de género y fronterizo, será posible construir una seguridad legítima, inclusiva y sostenible (Pastrana & Vera, 2019).

### ***Percepción Comunitaria y Resiliencia***

La percepción de las comunidades sobre las estrategias de las FMC es un indicador clave de su impacto en la protección y la construcción de paz. Datos preliminares de entrevistas revelan una dualidad: por un lado, los habitantes de zonas rurales valoran la presencia militar como un disuasivo contra la violencia directa; por otro, critican su incapacidad para resolver problemas estructurales como la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a tierras. En Tumaco, por ejemplo, líderes comunitarios afrocolombianos reconocen que los patrullajes han reducido enfrentamientos con disidencias, pero señalan que la erradicación de cultivos ilícitos ha destruido sus medios de vida sin alternativas sostenibles, según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 2022). Esta percepción refleja lo que (Peña et al., 2020) denominan una “seguridad superficial”, donde la protección física no se traduce en bienestar integral.

La resiliencia comunitaria -definida como la capacidad de adaptarse a entornos inseguros (Peña et al., 2020) también se ve afectada por esta dinámica. En el Cauca, las FMC han apoyado proyectos PDET, como la construcción de escuelas y vías, que han mejorado marginalmente la cohesión social en comunidades indígenas Nasa. Sin embargo, la persistencia de amenazas como la extorsión y el reclutamiento forzado por parte de disidencias limita esta resiliencia. Un estudio de la Universidad del Rosario (Gutiérrez Sanín y Vargas, 2021) encontró que en municipios PDET con alta presencia militar, el 60% de los habitantes aún perciben inseguridad económica y social, lo que sugiere que las estrategias no han fortalecido suficientemente las capacidades locales para enfrentar crisis.

Las tensiones históricas entre las comunidades y las FMC, exacerbadas por abusos durante el conflicto, por ejemplo, “ejecuciones extrajudiciales”, también influyen en esta percepción. Alba (2016) compara el caso colombiano con procesos de paz como el de Sudáfrica, donde la confianza comunitaria fue clave para la estabilidad, y subraya que en Colombia esta relación sigue fracturada. En Putumayo, por ejemplo, las comunidades denuncian que las operaciones militares a veces generan enfrentamientos que afectan a civiles, como el bombardeo accidental de 2021 que mató a ocho personas, según Human Rights Watch (2022). Estos incidentes erosionan la legitimidad de las FMC y dificultan la construcción de resiliencia, un desafío que requiere enfoques más participativos y menos coercitivos.

***Indicadores de Seguridad Nacional***

A nivel estructural, los indicadores de seguridad nacional ofrecen una perspectiva general sobre el impacto de las estrategias implementadas por las Fuerzas Militares Colombianas (FMC) en el contexto del posconflicto. Diversos informes internacionales han señalado mejoras en la reducción de ciertas formas de violencia directa, lo que sugiere avances en la estabilización del país tras la firma del Acuerdo de Paz. La disminución de homicidios y secuestros atribuidos a grupos armados ilegales ha sido interpretada como evidencia del éxito relativo de las operaciones militares en contener expresiones tradicionales del conflicto armado.

Sin embargo, esta lectura agregada oculta profundas disparidades territoriales y la persistencia de violencias menos visibles. En regiones rurales y periféricas, como el Bajo Cauca y otras zonas de alta conflictividad, las dinámicas de violencia continúan siendo alimentadas por disputas entre actores armados por el control de economías ilícitas. Estas disputas han generado tasas de homicidio significativamente superiores al promedio nacional, así como desplazamientos forzados que afectan de manera desproporcionada a comunidades vulnerables.

El desplazamiento interno, particularmente en zonas fronterizas, sigue siendo una problemática estructural que refleja la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad humana. Tal como lo han señalado diversos estudios, este fenómeno está estrechamente vinculado a desigualdades históricas no abordadas por el Acuerdo de Paz, lo que evidencia una priorización de la seguridad física sobre dimensiones más amplias como la seguridad económica, alimentaria y ambiental (Céspedes & Prieto, 2017; de Diego, 2018).

Asimismo, el incremento de la violencia contra líderes sociales plantea serias dudas sobre la capacidad de las FMC para proteger a actores clave en la construcción de paz territorial. Aunque se han implementado planes específicos para su protección, la persistencia de agresiones sugiere limitaciones en materia de inteligencia, articulación interinstitucional y presencia efectiva en los territorios. La dificultad para dismantelar las redes criminales responsables de estos ataques revela una fragmentación profunda en el sistema de seguridad, que trasciende las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y exige una respuesta integral del Estado.

Este contraste entre los avances registrados en los indicadores nacionales y las realidades locales subraya la necesidad de repensar el enfoque de seguridad en el posconflicto. Una estrategia

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

verdaderamente transformadora debe reconocer la diversidad territorial, incorporar enfoques de seguridad humana y fortalecer la coordinación entre actores estatales, sociales e internacionales.

### **Objetivo específico 3**

#### **Seguridad con Enfoque Territorial: Medición del Impacto de las Estrategias en Comunidades Rurales y Fronterizas**

Después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016, el escenario estratégico de seguridad en Colombia se ha representado por la mutación y persistencia de dinámicas de violencia incorporadas a economías ilícitas, la presencia de grupos armados residuales y la débil capacidad del Estado en áreas históricamente marginadas. En este contexto, las Fuerzas Militares han implementado líneas de acción orientadas al control de economías ilegales, la protección de comunidades vulnerables y el apoyo a la justicia transicional. Sin embargo, su impacto sobre la seguridad de la población, particularmente en zonas rurales y fronterizas, presenta limitaciones sustantivas derivadas de la falta de articulación interinstitucional, los vacíos de gobernanza local y la fragilidad de la respuesta estatal integral.

#### ***Estrategias frente a economías ilegales: efecto disruptivo limitado***

Las operaciones militares desarrolladas contra el narcotráfico y la minería ilegal han otorgado afectaciones temporales a las finanzas de los grupos armados organizados. Sin embargo, su sostenibilidad en el tiempo ha sido restringida. La persistencia de cultivos ilícitos, la rápida reconfiguración de redes criminales y la falta de oferta estatal efectiva de sustitución productiva continúan generando contextos de vulnerabilidad para la población rural.

En este contexto, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha sido concebido como una herramienta complementaria esencial para la consolidación de la paz territorial. No obstante, su limitada implementación ha generado tensiones significativas en las comunidades rurales, debilitando la confianza en las instituciones estatales. Esta situación ha favorecido la persistencia de economías ilícitas y ha erosionado los avances en legitimidad institucional.

Simultáneamente, las acciones contra la minería ilegal han enfrentado obstáculos estructurales que limitan su efectividad. Entre estos se destacan la corrupción en niveles locales, la debilidad institucional en zonas periféricas y la insuficiencia de capacidades estatales para ejercer control territorial. Estas condiciones han sido ampliamente documentadas por organizaciones internacionales

que analizan el vínculo entre extractivismo ilegal y violencia (Global Witness, 2021), evidenciando la necesidad de fortalecer la articulación entre seguridad, justicia ambiental y gobernanza local.

Balance operativo; Las Fuerzas Militares han demostrado capacidad para ejecutar operaciones focalizadas y generar impactos inmediatos sobre estructuras ilegales. No obstante, el impacto estructural sobre la seguridad permanece restringido si no se articulan acciones civiles, programas de desarrollo rural y fortalecimiento institucional local.

***Protección de comunidades vulnerables: presencia operativa sin profundidad institucional***

La estrategia de protección realizada por las Fuerzas Militares en áreas rurales y de frontera ha priorizado el despliegue de patrullajes, puntos de control y presencia móvil. Estas acciones han contribuido a mitigar ciertos focos de violencia en regiones como Tumaco y el Vaupés (Defensoría del Pueblo, 2022). Sin embargo, la persistencia de indicadores como el desplazamiento forzado, los asesinatos de líderes sociales y el control de actores armados sobre comunidades, evidencia la fragilidad de los logros alcanzados.

La limitada articulación con sectores clave como la salud, educación, justicia, infraestructura, impide consolidar condiciones de seguridad integral. Además, la escasez de un enfoque diferenciado ha afectado la capacidad del Estado para atender las amenazas específicas que enfrentan mujeres, pueblos étnicos y defensores de derechos humanos (Alvarado & Arribas, 2021).

Balance operativo; La acción militar ha resultado necesaria, pero no suficiente. La protección efectiva exige integración funcional entre sectores de seguridad y entidades civiles que intervienen en el territorio. Sin ello, la percepción comunitaria sobre la presencia del Estado se mantiene como intermitente, fragmentada y en algunos casos, ambigua.

***Apoyo a la justicia transicional: compromiso institucional y riesgos persistentes***

El respaldo de las Fuerzas Militares a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al proceso de reincorporación de excombatientes ha sido definitivo en la fase inicial de estabilización pos-acuerdo. La protección de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y el acompañamiento a comparecientes han generado condiciones básicas de seguridad. No obstante, los riesgos sobre firmantes del Acuerdo, líderes sociales y actores vinculados al sistema de justicia transicional se mantienen elevados.

Más de 400 excombatientes han sido asesinados desde 2016, principalmente en zonas con débil presencia institucional y alto interés estratégico para economías ilegales (JEP, 2023). Esta situación ha debilitado la percepción de garantías reales de seguridad y expone los desafíos que enfrenta el Estado para brindar protección efectiva frente a amenazas complejas y territoriales.

Balance operativo; La labor de las Fuerzas Militares ha sido fundamental en la etapa inicial de implementación del acuerdo. Sin embargo, el éxito de la justicia transicional como herramienta estabilizadora requiere un esfuerzo articulado entre organismos de seguridad, fiscalías, órganos de protección y actores del sistema judicial.

#### ***Factores estructurales que limitan el impacto de la acción militar***

La efectividad de las estrategias militares se encuentra condicionada por variables estructurales que reducen su alcance. La debilidad de la gobernanza territorial, la falta de articulación interinstitucional y la escasa capacidad de ejecución de los entes locales obstaculizan la sostenibilidad de los logros obtenidos en campo.

La fragmentación de esfuerzos y la baja operatividad del Plan de Acción Oportuna (PAO) reflejan una presencia estatal más formal que efectiva (Defensoría del Pueblo, 2022). En varios municipios, las Mesas de Seguridad no operan regularmente, lo que restringe la coordinación y la planeación territorial.

Balance operativo; La acción militar, aunque necesaria para garantizar mínimos de seguridad, no puede reemplazar el ejercicio integral de la función estatal. La consolidación de la seguridad exige una arquitectura institucional que combine legalidad, presencia efectiva y generación de confianza comunitaria.

#### **Objetivo específico 4**

##### **Fortalecimiento de la Capacidad Militar frente a Nuevas Amenazas para la Seguridad Nacional**

La transformación del entorno de seguridad en Colombia exige una revisión crítica de las capacidades militares frente a amenazas emergentes que desbordan los marcos tradicionales de defensa. El narcotráfico, las disidencias armadas, la minería ilegal y la violencia urbana configuran un escenario híbrido, donde lo militar debe articularse con lo social, lo institucional y lo internacional. Este objetivo propone una reconfiguración estratégica de las Fuerzas Militares Colombianas (FMC), orientada por

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

cuatro ejes: gobernanza multinivel, seguridad humana, enfoques interdisciplinarios y modernización operativa.

### ***Gobernanza Multinivel: Articulación Estratégica para la Seguridad Integral***

La gobernanza multinivel se refiere a la interacción coordinada entre actores estatales, locales e internacionales en la formulación y ejecución de políticas públicas. En el ámbito de la seguridad, esta perspectiva permite enfrentar amenazas transnacionales que superan las capacidades de los Estados-nación (Pastrana & Vera, 2019).

En Colombia, la fragmentación institucional y la débil articulación entre niveles de gobierno han limitado la eficacia de las operaciones militares. La experiencia internacional sugiere que la cooperación interinstitucional y transfronteriza puede ser decisiva. Por ejemplo, el International Crisis Group (2021) ha documentado cómo las redes criminales en zonas fronterizas como el Catatumbo operan con apoyo logístico y financiero de grupos extranjeros, lo que exige respuestas coordinadas entre países.

La gobernanza multinivel debe incluir:

- *Cooperación internacional:* Alianzas con organismos como Interpol, ONUDC y el Comando Sur de Estado Unidos. para compartir inteligencia, tecnología y entrenamiento.
- *Coordinación nacional:* Creación de consejos interinstitucionales en zonas críticas, integrando FMC, Policía, gobernaciones y agencias sociales como la ARN.
- *Participación local:* Vinculación de juntas de acción comunal y organizaciones sociales en el monitoreo territorial, fortaleciendo la legitimidad de las operaciones.

Este enfoque permite superar la lógica vertical de la seguridad, promoviendo una arquitectura colaborativa que responda a las dinámicas territoriales y transnacionales del conflicto.

### ***Seguridad Humana: Reorientación Ética y Social de la Acción Militar***

El concepto de seguridad humana, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2012), redefine la seguridad como la protección de las personas frente a amenazas estructurales como la pobreza, la exclusión y la violencia. En contextos como el colombiano, donde la militarización ha sido predominante, este enfoque ofrece una alternativa centrada en el bienestar y la dignidad humana.

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

Autores como Alvarado y Arribas (2021) argumentan que la seguridad humana no niega la necesidad de fuerza legítima, sino que la subordina a objetivos sociales. Las FMC deben transitar hacia un modelo de intervención que combine protección con desarrollo, especialmente en zonas rurales afectadas por economías ilícitas.

Las estrategias recomendadas incluyen:

- *Protección de proyectos sociales:* Escolta militar a programas de sustitución de cultivos, titulación de tierras y desarrollo rural.
- *Unidades especializadas:* Creación de batallones con formación en derechos humanos, enfoque de género y diálogo intercultural, orientados a proteger comunidades vulnerables.
- *Indicadores de bienestar:* Redefinición del éxito militar mediante métricas como acceso a salud, educación y reducción de pobreza, en lugar de indicadores exclusivamente operativos.

La experiencia de Sierra Leona (UNDP, 2012) demuestra que la integración de seguridad y desarrollo puede reducir la violencia postconflicto y fortalecer la cohesión social.

### ***Enfoques Interdisciplinarios: Comprensión Profunda de las Dinámicas del Conflicto***

La seguridad no puede abordarse exclusivamente desde una perspectiva técnica o militar. Las causas del conflicto armado en Colombia están profundamente enraizadas en factores sociales, económicos y culturales. Por ello, es necesario incorporar enfoques interdisciplinarios que permitan comprender y transformar estas dinámicas.

Gutiérrez Sanín y Vargas (2021) han documentado cómo el reclutamiento armado está vinculado a redes sociales, economías informales y estructuras de poder local. La antropología, la sociología rural y la criminología ofrecen herramientas analíticas para diseñar intervenciones más sensibles y eficaces.

Se proponen tres líneas de acción:

- *Equipos asesores interdisciplinarios:* Integración de expertos en ciencias sociales dentro del Estado Mayor Conjunto para el análisis territorial y el diseño de estrategias preventivas.
- *Investigación aplicada:* Convenios con universidades para estudios de campo que informen la planificación operativa, evitando errores como el uso desproporcionado de la fuerza.
- *Formación continua:* Inclusión de módulos interdisciplinarios en la capacitación de oficiales, promoviendo una comprensión integral del conflicto y sus actores.

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

Este enfoque permite humanizar la acción militar, reducir el margen de error y fortalecer la legitimidad institucional en contextos de alta sensibilidad social.

### ***Modernización Operativa: Recursos, Tecnología y Capacitación para la Eficacia Militar***

La capacidad operativa de las FMC está condicionada por la disponibilidad de recursos, tecnología y formación especializada. Peña et al. (2020) señalan que la brecha entre las amenazas contemporáneas y las capacidades militares tradicionales requiere una inversión estratégica en modernización.

La experiencia internacional, como el modelo chileno documentado por SIPRI (2021), demuestra que la inversión en tecnología, infraestructura y formación puede mejorar significativamente la eficacia operativa y la inteligencia táctica.

Las medidas propuestas incluyen:

- *Inversión tecnológica:* Adquisición de drones, sistemas satelitales y herramientas de ciberseguridad para mejorar la vigilancia y la respuesta rápida.
- *Capacitación especializada:* Programas intensivos en contrainsurgencia, derechos humanos y ciberdefensa, con simuladores y entrenamiento conjunto con aliados internacionales.
- *Infraestructura regional:* Construcción de academias militares en zonas críticas, adaptadas a las necesidades territoriales y con enfoque en formación integral.

La modernización no debe limitarse a lo técnico, sino que debe estar orientada por principios éticos, sociales y estratégicos que fortalezcan el control territorial sin vulnerar los derechos humanos.

En conclusión, el fortalecimiento de la capacidad militar frente a nuevas amenazas para la seguridad nacional en Colombia requiere una transformación profunda que articule lo operativo con lo social, lo institucional y lo internacional. La gobernanza multinivel, la seguridad humana, los enfoques interdisciplinarios y la modernización estratégica constituyen pilares fundamentales para una acción militar legítima, eficaz y sostenible.

Este enfoque integral no solo responde a las exigencias del contexto colombiano, sino que se alinea con las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad democrática, consolidación de la paz y protección de los derechos humanos.

## **Conclusiones**

El escenario de seguridad en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 se ha caracterizado por una transformación profunda más que por una superación definitiva del conflicto. La desaparición de las FARC como actor unificado ha dado paso a una fragmentación del poder criminal, evidenciada en la proliferación de nuevas amenazas que desafían de forma simultánea las capacidades operativas, estratégicas e institucionales del Estado. El narcotráfico y la minería ilegal, reforzados por estructuras descentralizadas y transnacionales, se han consolidado como pilares de economías ilícitas que financian actores armados residuales, erosionan la seguridad humana y ambiental, y debilitan la gobernanza estatal, particularmente en zonas rurales y periféricas. Las disidencias de las FARC han evolucionado hacia redes criminales con alianzas híbridas que transgreden fronteras, adaptándose a vacíos institucionales y económicos del posconflicto. Al mismo tiempo, las ciudades han visto un resurgimiento de la violencia urbana a través de microestructuras criminales, como pandillas y bandas transnacionales, que agravan la inseguridad en contextos de exclusión social y desempleo juvenil.

Este nuevo entorno, marcado por la complejidad, la simultaneidad y la dispersión de amenazas, exige una reconceptualización de la seguridad nacional que supere los enfoques tradicionales centrados en el combate directo a enemigos definidos. La seguridad en el posconflicto debe ser entendida desde una perspectiva integral, que articule respuestas militares con políticas sociales, económicas y ambientales, y que contemple la seguridad humana como eje central. De no adaptarse, las Fuerzas Militares Colombianas continuarán enfrentando desafíos operativos desbordados por amenazas que no solo se diversifican, sino que mutan con rapidez, aprovechando cada vacío de poder y fragmentación institucional. En este sentido, el análisis de las nuevas amenazas posacuerdo evidencia no solo una transformación del conflicto, sino la necesidad urgente de redefinir las estrategias de seguridad nacional a la luz de un entorno más dinámico, asimétrico y multidimensional.

Las estrategias operativas y adaptativas desarrolladas por las Fuerzas Militares Colombianas (FMC) tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP evidencian un proceso de transformación institucional frente a un escenario de seguridad más fragmentado, dinámico y multidimensional. En este nuevo entorno, las FMC han desplegado acciones orientadas a tres frentes clave: la lucha contra

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

economías ilegales, la protección de comunidades vulnerables y el respaldo a la justicia transicional. Estas acciones reflejan un esfuerzo por ajustar la doctrina militar a las demandas de un posconflicto complejo, donde los enemigos no son únicos ni definidos, y donde la violencia adopta múltiples formas.

En el ámbito operativo, las campañas contra el narcotráfico y la minería ilegal han logrado resultados puntuales —como la erradicación de cultivos y la desarticulación de redes ilícitas— pero enfrentan persistentes desafíos logísticos, sociales y estructurales. La reincidencia de estas economías criminales, alimentadas por la falta de presencia estatal integral y por la connivencia entre actores ilegales y estructuras locales de poder, limita la sostenibilidad de los logros obtenidos. Asimismo, la resistencia de comunidades dependientes de estos circuitos económicos, y la limitada articulación con políticas de sustitución, evidencian la desconexión entre el componente militar y los pilares sociales del posconflicto.

En cuanto a la protección de comunidades vulnerables, las FMC han asumido un rol protagónico en la seguridad de poblaciones afectadas por la violencia, especialmente en zonas rurales y fronterizas. El despliegue territorial y el apoyo a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han contribuido, en ciertos casos, a mitigar enfrentamientos y mejorar la percepción de seguridad. No obstante, estas acciones muestran un impacto desigual y limitado cuando no se acompañan de inversión estatal sostenida, servicios públicos y reformas estructurales. Las críticas sobre su alcance, así como los impactos diferenciados sobre mujeres y comunidades étnicas, revelan la necesidad de un enfoque más sensible al contexto y a las dinámicas locales.

Finalmente, el apoyo a la justicia transicional representa un avance significativo en el rol de las FMC como garantes del proceso de paz, al brindar seguridad a excombatientes, proteger líderes sociales y colaborar con la JEP. Sin embargo, este papel ha generado tensiones con sectores sociales que perciben la militarización de funciones civiles y recuerdan con desconfianza el legado del conflicto. Además, las exigencias de rendición de cuentas hacia la institución militar, especialmente en relación con crímenes del pasado, tensionan la legitimidad y cohesión interna de las Fuerzas.

En suma, aunque las FMC han demostrado una capacidad de adaptación operativa notable, sus estrategias enfrentan limitaciones estructurales que desbordan el ámbito militar. La ausencia de una articulación efectiva con políticas sociales, económicas y de desarrollo territorial impide consolidar los logros alcanzados y cerrar los ciclos de violencia. Por tanto, la transformación estratégica de las Fuerzas Militares debe ir acompañada de una reforma integral del aparato estatal,

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

basada en la seguridad humana, la justicia social y la legitimidad institucional. Solo así será posible avanzar de manera sostenible hacia una paz duradera y una seguridad verdaderamente inclusiva en el contexto colombiano del siglo XXI.

El balance general de las estrategias implementadas por las Fuerzas Militares Colombianas tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 revela un esfuerzo sostenido por responder a un entorno de amenazas persistentes, complejas y territorialmente dispersas. Las líneas de acción orientadas al control de economías ilegales, la protección de comunidades vulnerables y el respaldo a la justicia transicional han permitido avances operativos concretos, como la erradicación de cultivos, la instalación de bases móviles y el acompañamiento a procesos de reincorporación. No obstante, estos logros se han visto limitados por factores estructurales que condicionan su sostenibilidad y profundidad en el tiempo.

En el caso de las operaciones contra economías ilícitas, los efectos disruptivos han sido puntuales y poco duraderos. La reconfiguración ágil de redes criminales, la débil implementación del PNIS y la limitada oferta de alternativas legales para las comunidades rurales han perpetuado escenarios de alta vulnerabilidad. Del mismo modo, la acción militar en favor de la protección de comunidades ha logrado contener ciertos focos de violencia, pero no ha transformado las condiciones estructurales de inseguridad debido a la escasa articulación con sectores civiles fundamentales como salud, educación, justicia y desarrollo económico. En este contexto, la percepción comunitaria de la presencia estatal continúa siendo fragmentada, intermitente e incluso ambigua.

El apoyo a la justicia transicional ha demostrado compromiso institucional por parte de las Fuerzas Militares, facilitando condiciones mínimas de seguridad en las etapas iniciales del postacuerdo. Sin embargo, la persistencia de amenazas contra excombatientes, líderes sociales y actores del sistema de justicia revela serias deficiencias en la capacidad del Estado para proteger a quienes encarnan la implementación de la paz. Este panorama evidencia que, si bien las Fuerzas Militares cumplen un rol operativo fundamental, el éxito de estas estrategias depende de una articulación real con el aparato civil del Estado.

La conclusión más relevante es que la acción militar, por sí sola, no es suficiente para garantizar seguridad integral en el posconflicto colombiano. El impacto de sus estrategias se encuentra directamente condicionado por la debilidad de la gobernanza territorial, la falta de coordinación interinstitucional y la limitada capacidad operativa de los entes locales. Sin una presencia estatal efectiva, una institucionalidad fuerte y políticas públicas integrales, las Fuerzas

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

Militares operan sobre un terreno institucional precario que compromete la consolidación de sus logros. La seguridad en zonas rurales y fronterizas exige, por tanto, una arquitectura estratégica que combine legalidad, legitimidad y desarrollo, y que haga del esfuerzo militar un componente dentro de una respuesta multidimensional del Estado.

El fortalecimiento de las capacidades militares colombianas frente a nuevas amenazas requiere mucho más que ajustes tácticos u operativos: exige una transformación estratégica, institucional y doctrinal en sintonía con los desafíos contemporáneos de la seguridad nacional. Si bien las Fuerzas Militares Colombianas (FMC) han demostrado eficacia en acciones puntuales —como la neutralización de actores armados o la reducción temporal de ciertos delitos—, su impacto estructural ha sido limitado por factores recurrentes como la falta de articulación interinstitucional, la insuficiencia de recursos y la desconexión con las realidades sociales que alimentan la violencia.

En este contexto, el conjunto de recomendaciones propuesto busca superar la visión fragmentada de la seguridad, apostando por un enfoque integral e interdisciplinario. El fortalecimiento de la gobernanza multinivel se erige como una condición indispensable para enfrentar amenazas transnacionales, generar coordinación entre niveles de gobierno, y vincular a las comunidades en los procesos de prevención y respuesta. Del mismo modo, priorizar la seguridad humana amplía la noción de defensa más allá de la protección física, reconociendo que el bienestar social, económico y ambiental son condiciones necesarias para la paz sostenible.

La incorporación de enfoques interdisciplinarios representa otro eje transformador: integrar conocimientos de las ciencias sociales y humanas en la planificación militar permite entender mejor las causas profundas del conflicto, los tejidos comunitarios y las dinámicas culturales que inciden en la seguridad territorial. Finalmente, el incremento de recursos y capacidades —tanto en tecnología como en formación especializada— no es un lujo, sino una necesidad urgente para que las FMC puedan responder con eficacia, legalidad y legitimidad ante un entorno que cambia aceleradamente.

Estas propuestas no solo están ancladas en evidencia empírica y en experiencias internacionales exitosas, sino que también responden a las lecciones aprendidas en más de seis años de postacuerdo, donde los esfuerzos militares, sin respaldo político, institucional y social, han demostrado sus límites. Consolidar la seguridad nacional hoy no es únicamente garantizar el monopolio legítimo de la fuerza, sino construir capacidades integradas, resilientes y legitimadas que respondan simultáneamente a la violencia armada, la exclusión estructural y la desconfianza institucional.

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**  
Bogotá D.C., Colombia

En suma, el fortalecimiento de la capacidad militar colombiana debe inscribirse en una lógica de seguridad integral del Estado, donde las FMC actúen como un componente fundamental —pero no único— de una arquitectura de paz territorial, desarrollo inclusivo y soberanía efectiva. Solo así será posible garantizar una seguridad nacional sostenible frente a amenazas cada vez más híbridas, adaptativas y multidimensionales.

## **Referencias**

- Alba, A. (2016). Experiencias internacionales de paz: Lecciones aprendidas para Colombia. UTADEO, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
- Alvarado, M., & Arribas, J. (2021). Seguridad humana en América Latina: desafíos y perspectivas. FLACSO.
- Alvarado, M., & Arribas, J. (2021). Seguridad humana en Colombia: Desafíos post-acuerdo. <https://flacsoandes.org/libros/digital/58047.pdf>
- Álvarez, E., Pardo, D., & Cajiao, A. (2018). Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC (No. 30). Fundación Ideas para la Paz. [https://multimedia.ideaspaz.org/media/website/FIP\\_Disidencias\\_Final.pdf](https://multimedia.ideaspaz.org/media/website/FIP_Disidencias_Final.pdf)
- Arias Henao, D. P. (2020). La implementación del acuerdo de paz y la transformación del conflicto armado en Colombia. *Revista Científica General José María Córdova*, 18(31), 565–584. <https://doi.org/10.21830/19006586.621>
- Baquero, J., Müller, F., Raucher, M., & Segura, R. (Eds.). (2022). El posacuerdo en Colombia. Procesos situacionales. Temporalidad, territorio y materialidad. Universidad del Rosario. <https://doi.org/10.12804/urosario9789587849820>
- Cárdenas, J. C., YNFANTE, J. C., & Benítez, E. R. (2018). La implementación del Acuerdo de Paz y la Seguridad en Colombia en el posconflicto. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 23(2), 178–193.
- Cárdenas, M., Mejía, D., & Ramírez, J. (2018). Seguridad y desarrollo en Colombia. Universidad de los Andes.
- Castellanos, D., Sánchez, J., Olaya, Á., & Ortega, A. (2024). GRUPOS POS-FARC RUPTURAS Y CONTINUIDADES EN UN NUEVO ESCENARIO DE VIOLENCIA. [https://centrodehistoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/Web\\_Grupos-posFARC.pdf](https://centrodehistoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/Web_Grupos-posFARC.pdf)
- Céspedes, L. M., & Prieto, E. (2017). Utopía u oportunidad fallida: Análisis crítico del Acuerdo de Paz. Universidad del Rosario. <https://doi.org/10.12804/tj9789587389289>
- Céspedes-Baéz, L. M., & Prieto-Ríos, E. (2017). Utopía u oportunidad fallida: Análisis crítico del Acuerdo de Paz. Editorial Universidad del Rosario.
- Céspedes-Baéz, L., & Prieto-Ríos, E. (2017). Justicia transicional y reforma institucional en Colombia. Editorial Universidad del Rosario.

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

- CODHES. (2022). Informe sobre desplazamiento forzado en Colombia 2021. In. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
- Comando General de las Fuerzas Militares. (2015). Plan Estratégico Sectorial de Seguridad y Defensa 2030. [https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/Planeacion/Planes/plan\\_estrategico\\_militar\\_2030.pdf](https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/Planeacion/Planes/plan_estrategico_militar_2030.pdf)
- Corte Constitucional República de Colombia. (2016). Sentencia T 622 2016. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>
- Cubides, J., CALDERA, J., & RAMÍREZ, E. (2018). La implementación del Acuerdo de Paz y la Seguridad en Colombia en el posconflicto. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1802592>
- de Diego, M. C. (2018). La paz en el territorio: poder local y posconflicto en Colombia. Universidad Externado.
- Defensoría del Pueblo. (2019). Informe de riesgo nacional N.o 010-19 (No. 10). <https://alertasstg.blob.core.windows.net/informes/010.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2022). Boletín de alertas y análisis territoriales. <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/alertas-tempranas/>
- Defensoría del Pueblo. (2022). Informe sobre desplazamiento forzado en zonas mineras.
- Felbab-Brown, V. (2021). The limits of punishment: Transitional justice and violent extremism in Colombia. In. Brookings Institution Press.
- Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. [https://edmorata.es/wp-content/uploads/2020/06/Flick.Disen%CC%83oInvestigacionCualitativa.PR\\_.pdf](https://edmorata.es/wp-content/uploads/2020/06/Flick.Disen%CC%83oInvestigacionCualitativa.PR_.pdf)
- Global Witness. (2022). Last line of defence: The industries causing the climate crisis and attacks against land and environmental defenders. In. Global Witness. .
- GlobalWitness. (2021). LAST LINE OF DEFENCE.
- Gutiérrez Sanín, F., & Vargas, J. (2021). Reclutamiento armado y redes sociales en el conflicto colombiano. Universidad Nacional de Colombia.
- Gutiérrez Sanín, F., & Vargas, R. (2021). Paz y desarrollo en los territorios PDET. In. Universidad del Rosario. .
- Hernández, R., Fernandez, C. F., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (Sexta edición). McGraw-Hill Education.
- Human Rights Watch. (2022). Colombia: Bombardeo militar mató civiles en Putumayo. In. HRW Report. .

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

- IDEAM. (2019). Estado del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 2019. <https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/informes/Estado-del-ambiente-y-los-recursos-naturales>
- INDEPAZ. (2023). Informe de conflicto armado en Colombia 2022. In. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. <https://indepaz.org.co/informe-sobre-presencia-de-grupos-armados-en-colombia-2021-2022-1/>
- INML. (2023). Informe de homicidios 2022. In. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. [https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/1124000/Forensis\\_2023.pdf](https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/1124000/Forensis_2023.pdf)
- Insight Crime. (2023). Arauca: La frontera del contrabando. In. Insight Crime. <https://insightcrime.org/es/investigaciones/>
- International Crisis Group. (2016). Últimos pasos hacia el fin de la guerra en Colombia Informe sobre América Latina N°58 (No. 58).
- International Crisis Group. (2021). Paro y pandemia: Las respuestas a las protestas masivas en Colombia.
- International Crisis Group. (2021). Peace and Security in Colombia’s Borderlands.
- International Crisis Group. (2022). Colombia’s borderlands: Caught in the crossfire. In. Report No. 298. .
- JEP. (2022). Informe anual 2022. Jurisdicción Especial para la Paz Retrieved from <https://www.jep.gov.co/Planeacion1/Informes%20de%20gesti%C3%B3n/2023/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202023.pdf>
- Kaldor, M. (2012). New and Old wars.
- Naciones Unidas. (2024). Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2024/968 01 Nov 2024 (No. 968).
- Niño, C., & Castillo, A. (2021). La transformación de la seguridad en Colombia tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP. *Opera*, 30, 79-98.
- ONU MUJERES. (2022). Plan estratégico de ONU Mujeres 2022-2025.
- Pastrana, E., & Vera, D. (2019). El rol de las Fuerzas Armadas de Colombia contra las nuevas amenazas y su impacto en las relaciones cívico-militares. In *Fuerzas Militares de Colombia: Nuevos roles y desafíos nacionales e internacionales* (pp. 265-312).
- Pastrana, E., & Vera, D. (2019). El rol de las Fuerzas Armadas de Colombia contra las nuevas amenazas y su impacto en las relaciones cívico-militares. In *Fuerzas Militares de Colombia: nuevos roles y desafíos nacionales e internacionales* (pp. 265–312).

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

- Pastrana, E., & Vera, L. (2019). *Gobernanza multinivel y seguridad en América Latina*. Universidad del Rosario.
- Peña, C., Rodríguez, A., & Torres, L. (2020). *Capacidades militares y seguridad nacional*. Revista Fuerzas Armadas.
- Peña, M. A., Barrera, V., Gutiérrez Sanín, F., Parada Hernández, M. M., Perea Restrepo, C. M., & Vargas M, R. (2020). *Violencias que persisten*. Editorial Universidad del Rosario.
- Peña, M., Barrera, V., Gutierrez, F., Parada, M., Perea, C., & Vargas, R. (2020). *Violencias que persisten el escenario tras los acuerdos de paz*.
- Presidencia de la Republica. (2018). *Plan de Acción Oportuna de prevención y protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos*. [https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/09/plan\\_de\\_accion\\_oportuna\\_de\\_prevenccion\\_y\\_proteccion\\_0.pdf](https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/09/plan_de_accion_oportuna_de_prevenccion_y_proteccion_0.pdf)
- SIPRI. (2021). *Military Expenditure Database*.
- UNDOC. (2022). *Visión estratégica de UNODC para América Latina y el Caribe*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- UNDOC. (2023). *Visión estratégica de UNODC para América Latina y el Caribe*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. <https://www.unodc.org/unodc/es/index.html>
- UNDP. (1994). *Human Development Report*.
- UNDP. (2012). *Human Development Report*.
- Villamizar, Ma., Hoyos, C., Triana, S., & Grace, L. (2024). *Excombatientes y acuerdo de paz con las FARC-EP en Colombia. Balance de la etapa temprana (Uniandes)*. <http://dx.doi.org/10.30778/2019.39>